

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA

Auto sustanciación

PROCESO No. 76001-23-33-000-2019-00087-00
DEMANDANTE JUAN ALBERTO ORTIZ GONZÁLEZ Y OTROS
DEMANDADO FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
MEDIO DE CONTROL EJECUTIVO

Santiago de Cali, Primero (1º) de julio de dos mil veinte (2020).

MAGISTRADA PONENTE: Dra. Luz Elena Sierra Valencia

Mediante auto del 2 de julio de 2019 se ordenó decretar como medida cautelar, el **EMBARGO Y RETENCIÓN** de los depósitos bancarios que tenga o llegare a tener la **FISCALIA GENERAL DE LA NACION** en cuentas corrientes o de ahorros o de cualquier otro título financiero que posea en los bancos, POPULAR, OCCIDENTE y BOGOTÁ.

Así mismo, se limitó el embargo antes decretado a la suma de \$ 502.628.467, como cuantía máxima de la medida, conforme lo señalado en el numeral 10 del artículo 593 del CGP.

A través de la secretaria de esta Corporación, se libraron los oficios a las diferentes entidades bancarias objeto de las medidas de embargo y retención de dineros.

El Banco de Occidente informó que, conforme a las directrices impartidas por la Fiscalía General de la Nación, los recursos que posee en esa entidad bancaria, son de carácter inembargable, no obstante, también indica que se encuentran registrados 5 embargos en su contra. (fls. 139 C.1 y 12 C. 2).

Por su parte, el Banco Popular comunicó al Despacho lo siguiente: *"En atención al oficio radicado en nuestras dependencias y de conformidad con el artículo 594 del CGP, con el fin de obtener su pronunciamiento al respecto, nos permitimos adjuntar certificación de inembargabilidad, en donde se manifiesta que los recursos están incorporados en el Presupuesto General de la Nación, razón por la cual gozan de protección de inembargabilidad."*

Por lo anteriormente expuesto el Banco Popular no procedió a registrar la medida de embargo. Solicitamos se sirva informar de ser el caso, si nuestra entidad debe tramitar la orden de embargo". (fl. 139 C.1).

Adjunto a dicho oficio, se aportó la certificación de fecha 11 de octubre de 2017, suscrita por el Director de la Fiscalía General de la Nación, en la cual se consigna que sus recursos son inembargables por ser parte del Presupuesto General de la Nación, así como también, en consideración al parágrafo 2 del artículo 195 de la ley 1437 de 2011, según el cual, el monto asignado para sentencias y conciliaciones de las entidades públicas, es inembargable.

Por su parte el Baco de Bogotá no ha emitido ningún pronunciamiento sobre la medida de embargo decretada.

Para resolver se considera:

En el presente caso como se anotó anteriormente, el Banco de Occidente y el Banco Popular se negaron a registrar el embargo decretado, en cumplimiento de la directriz impartida por la FISCALIA GENERAL DE LA NACION según la cual sus recursos son inembargables por ser parte del Presupuesto General de la Nación.

Al respecto, anota el Despacho que el artículo 19¹ del Estatuto Orgánico del Presupuesto, fue declarado condicionalmente exequible mediante sentencia C-354-97 de 4 de agosto de 1997, Magistrado Ponente Dr. Antonio Barrera Carbonell, bajo el entendido que los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica dicho artículo y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar su ejecución, con embargo de recursos del presupuesto; en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos.

De dicha providencia se destaca:

¹ Por el cual se ccmpilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto...

ARTICULO 19. INEMBARGABILIDAD. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

No obstante la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias.

Se incluyen en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo 4 del título XII de la Constitución Política.

Los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en el presente artículo, so pena de mala conducta (Ley 38/89, artículo 16, Ley 179/94, artículos 6o., 55, inciso 3o.).

"... Para la Corte el principio de inembargabilidad general que consagra la norma resulta ajustado a la Constitución, por consultar su reiterada jurisprudencia. No obstante, es necesario hacer las siguientes precisiones:

a) La Corte entiende la norma acusada, con el alcance de que si bien la regla general es la inembargabilidad, ella **sufre excepciones cuando se trate de sentencias judiciales, con miras a garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos a las personas en dichas sentencias.**

Por contener la norma una remisión tácita a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo, igualmente entiende la Corte que los funcionarios competentes deben adoptar las medidas que conduzcan al pago de dichas sentencias dentro de los plazos establecidos en las leyes...

Podría pensarse, que sólo los créditos cuyo título es una sentencia pueden ser pagados como lo indica la norma acusada, no así los demás títulos que constan en actos administrativos o que se originan en las operaciones contractuales de la administración. Sin embargo ello no es así, porque no existe una justificación objetiva y razonable para que únicamente se puedan satisfacer los títulos que constan en una sentencia y no los demás que provienen del Estado deudor y que configuran una obligación clara, expresa y actualmente exigible. Tanto valor tiene el crédito que se reconoce en una sentencia como el que crea el propio Estado a través de los modos o formas de actuación administrativa que regula la ley.

Por lo tanto, es ineludible concluir que el procedimiento que debe seguirse para el pago de los créditos que constan en sentencias judiciales, es el mismo que debe adoptarse para el pago de los demás créditos a cargo del Estado, pues si ello no fuera así, se llegaría al absurdo de que para poder hacer efectivo un crédito que consta en un título válido emanado del propio Estado es necesario tramitar un proceso de conocimiento para que a través de una sentencia se declare la existencia de un crédito que, evidentemente, ya existe, con el pernicioso efecto del recargo innecesario de trabajo en la administración de justicia.

En conclusión, la Corte estima que los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos...".

De igual manera, respecto a la inembargabilidad de los recursos públicos, en Sentencia C-566 de 2003, MP. Álvaro Tafur Galvis, al definir sobre la inconstitucionalidad del inciso primero (parcial) del artículo 91 de la Ley 715 de 2001, la Corte Constitucional reiteró que el concepto de inembargabilidad de los recursos públicos no puede ser considerado como

absoluto, existiendo en principio tres (3) excepciones a la regla, entre ellas, el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias, tal como ocurre en el presente caso.²

Bajo el anterior panorama, la Corte explicó que si bien el Legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el Presupuesto General de la Nación; sin embargo, ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción³, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada.

De otro lado, también debe precisar el Despacho que la orden de embargo contenida en el auto del 2 de julio de 2019, no se encuentra dirigida a retener los recursos de que trata el artículo 195⁴ del CPACA, conforme lo afirma la Fiscalía en la certificación del 11 de octubre de 2017 (fls. 212 144), pues en la aludida providencia, se aclara que la medida de embargo versa sobre los recursos cuya embargabilidad es procedente conforme a las excepciones y reglas previstas en las sentencias de constitucionalidad C-354 de 1997, C-566 de 2003 y C-1154 de 2008, anteriormente citadas.

Por lo anteriormente expuesto, considera el Despacho que contrario a los argumentos de inembargabilidad expuestos por la Fiscalía General de la Nación, la medida de embargo decretada en este caso, es de toda suerte procedente, pues tiene como finalidad garantizar el pago de la obligación originada en el incumplimiento de la sentencia del 22 de febrero de 2017, proferida por el Consejo de Estado.

Por tanto, como quiera que la medida de embargo cumple con los presupuestos que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para la procedencia excepcional de una medida cautelar contra los recursos públicos, como es el pago de condenas impuestas en providencias judiciales, se ordenará que por la Secretaría de esta Corporación, se libren de nuevo los respectivos oficios al BANCO POPULAR, BANCO DE OCCIDENTE Y BANCO DE

² Posición reiterada en la sentencia C-1154 de 2008, en la cual se abordó toda la línea jurisprudencial sobre los fundamentos constitucionales de la inembargabilidad, estableciéndose tres excepciones al mismo, así: i) La necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, ii) El pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias, y iii) Los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.

³ "a) La necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, b) El pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias, y c) Los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible".

⁴ **ARTÍCULO 195. TRÁMITE PARA EL PAGO DE CONDENAS O CONCILIACIONES....**

PARÁGRAFO 2c. El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de estos recursos será falta disciplinaria.

BOGOTA, con copia de la presente providencia y del auto del 2 de julio de 2019, para que registren la medida decretada por este Despacho.

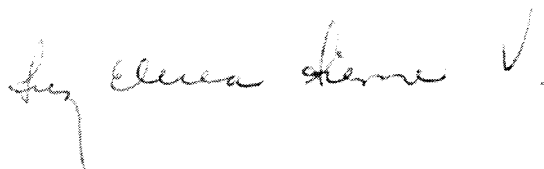
En consecuencia, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE

Por la Secretaría de esta Corporación, ofíciase nuevamente al BANCO POPULAR, al BANCO DE OCCIDENTE y al BANCO DE BOGOTA, con copia de la presente providencia y del auto del 2 de julio de 2019, para que adopten la medida de embargo decretada en este proceso.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

La Magistrada,



LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

Auto. 2019-00087-00

2019-07-02 10:00:00